

Debemos proteger a los agricultores

Gastón Saavedra Chandía
Senador de la República



Cuando hablamos de agricultura muchas veces se piensa únicamente en números, hectáreas o exportaciones. Pero detrás de cada siembra existe algo mucho más importante: la seguridad alimentaria de Chile. Lo que hoy está ocurriendo en la provincia de Biobío y en el sur del país no es simplemente una dificultad económica para los agricultores; es una advertencia seria respecto a la capacidad futura del país para producir sus propios alimentos.

La Región del Biobío cumple un rol estratégico para Chile. Solo en trigo candeal concentra cerca del 46% de la producción nacional. También posee una participación decisiva en avena, maíz, papa, remolacha, achicoria industrial y producción forestal. A eso se suma una creciente fruticultura moderna, especialmente en avellano europeo, arándanos y nogales. Miles de empleos directos e indirectos dependen de esta actividad en comunas como Los Ángeles, Cabrero, Yumbel, Mulchén, Negrete, Laja y San Rosendo.

Sin embargo, hoy el agro enfrenta probablemente una de las temporadas más complejas de las últimas décadas. El alza explosiva de fertilizantes, especialmente de la urea, el aumento del combustible, la incertidumbre internacional, la crisis hídrica y la baja rentabilidad de los cultivos están provocando que muchos agricultores simplemente evalúen no sembrar.

Y aquí es donde el problema deja de ser sectorial y pasa a transformarse en un problema nacional.

Porque cuando un agricultor deja de sembrar trigo, avena o maíz, no solo pierde él. Pierde Chile. Perdemos capacidad de producción, aumentamos la dependencia alimentaria externa y debilitamos la economía rural. Hoy el país importa gran parte de los fertilizantes que utiliza y depende crecientemente de mercados internacionales cada vez más inestables. Basta observar cómo los conflictos internacionales disparan los costos de producción para entender que no podemos seguir dependiendo exclusivamente del exterior para alimentar a nuestra población.

El caso de la remolacha es probablemente el ejemplo más dramático de esta crisis. La suspensión de recepción para la temporada 2026-2027 golpea no solo a productores agrícolas, sino también a transportistas, contratistas, talleres mecánicos, temporeros y al comercio rural completo. Durante décadas la remolacha estructuró economías comunales enteras en Biobío. Hoy muchas de esas familias observan con incertidumbre cómo desaparece una actividad histórica producto de costos imposibles de sostener.

Por eso el Gobierno debe comprender que el Biobío requiere un tratamiento agrícola especial y urgente. No hablo de privilegios, si no de buscar la forma de asegurar la soberanía alimentaria de la región y el país. La agricultura debe ser tratada como una actividad estratégica.

El Estado debe implementar medidas concretas para garantizar continuidad de siembras, como un subsidio a fertilizantes a todos los agricultores, sin distinción de tamaño, la estabilización del precio del combustible agrícola, créditos blandos para pequeños y medianos agricultores, fortalecimiento del riego tecnificado, apoyo especial a cultivos estratégicos, incentivos a la agroindustria regional y políticas de protección frente a competencia internacional desleal.

Chile no puede reaccionar cuando las góndolas están vacías o cuando los precios de los alimentos se vuelven impagables para las familias, no podemos esperar a que el kilo de tomates llegue a 5 mil pesos para reaccionar. La seguridad alimentaria se construye antes, apoyando a quienes producen.

Mientras algunos observan la agricultura únicamente desde una planilla Excel, en los campos del Biobío miles de personas siguen levantándose de madrugada para producir el alimento que llega diariamente a la mesa de los chilenos. Ellos no necesitan discursos; necesitan condiciones mínimas para seguir sembrando.

Porque si el Biobío deja de producir, Chile entero lo terminará pagando, presidente apoyemos a los agricultores.